



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
D.C.

Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

RADICADO: 11001-33-35-026-2015-00486
PROCESO: EJECUTIVO
DEMANDANTE: JAIRO GONZALEZ PARDO
DEMANDADA: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA
POLICÍA NACIONAL

- i. Auto decide sobre justificación presentada ante la ausencia de la apoderada Viviana Judith Fonseca Romero a la audiencia adelantada el 9 de abril de 2018.**

El Despacho observa que la abogada **Viviana Judith Fonseca Romero** quien representaba los intereses de la entidad demandada presentó escrito justificando la inasistencia a la audiencia inicial de que trata el artículo 372 del C.G.P., programada para el día 9 de abril de 2018 según consta a folios 134 y 135 del expediente.

La profesional del derecho manifiesta que para la fecha en la cual se surtió la audiencia inicial, ya no se encontraba laborando para la entidad ejecutada, habida consideración que la fecha de terminación del contrato de prestación de servicios, se hizo efectiva el 15 de diciembre de 2017, tal y como consta en el contrato No. CO53-17/GAC visible a folios 148 a 151 del plenario.

El artículo 372 del Código General del Proceso, prevé:

“Artículo 372. Audiencia inicial. El juez, salvo norma en contrario, convocará a las partes para que concurran personalmente a una audiencia ***con la prevención de las consecuencias por su inasistencia, y de que en ella se practicarán interrogatorios a las partes.*** La audiencia se sujetará a las siguientes reglas:

1. Oportunidad. El juez señalará fecha y hora para la audiencia una vez vencido el término de traslado de la demanda, de la reconvención, del llamamiento en garantía o de las excepciones de mérito, o resueltas las excepciones previas que

deban decidirse antes de la audiencia, o realizada la notificación, citación o traslado que el juez ordene al resolver dichas excepciones, según el caso.

El auto que señale fecha y hora para la audiencia se notificará por estado y no tendrá recursos. En la misma providencia, el juez citará a las partes para que concurran personalmente a rendir interrogatorio, a la conciliación, y los demás asuntos relacionados con la audiencia.”

Subraya y negrilla fuera de texto

La aportación del documento por el cual se acredita la razón de la inasistencia a la audiencia inicial, se efectuó dentro de los tres días siguientes a la celebración de la diligencia, tal y como lo dispone el inciso 2° del numeral 3° del artículo 372 del Código General del Proceso.

Esta circunstancia lleva al Juzgado a valorar la situación presentada por cuanto la apoderada presenta la justificación de la inasistencia a la audiencia dentro del término legal, soportado en la terminación del contrato de prestación de servicios con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

Al respecto, y una vez revisado el plenario se constata, que la Profesional del Derecho radicó ante la Oficina de Apoyo Judicial el 14 de diciembre de 2017¹, renuncia del poder argumentado la terminación del contrato de prestación de servicios con Casur, y para el efecto, aportó con la renuncia copia del contrato No. CO53-17/GAC.

A su turno, y mediante providencia de fecha 2 de febrero de 2018², éste Despacho Judicial fijó fecha y hora para la realización de la audiencia de que trata el artículo 372 del CGP, sin realizar pronunciamiento alguno sobre la renuncia al poder allegada por la Doctora Fonseca Romero a través de memorial radicado el 14 de diciembre de 2017, razón por la cual, y como quiera que la apoderada judicial de la entidad ejecutada presentó renuncia al poder, antes de emitirse el auto de fijación de fecha y hora para la realización de la audiencia inicial, éste Despacho Judicial aceptará la justificación presentada por la Profesional del Derecho, y a su vez, aceptará la renuncia al poder, exonerándola de las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias adversas que se hubiesen derivado de su inasistencia.

En consecuencia se dispone:

PRIMERO: Aceptar la justificación presentada por la abogada Viviana Judith Fonseca Romero, identificada con cédula de ciudadanía número 1.020.733.352 expedida en Bogotá y portadora de la tarjeta profesional de abogada número 257.789 del Consejo Superior de la Judicatura, por la

¹ Folios 127 a 132

² Folios 134-135

inasistencia a la audiencia de inicial llevada a cabo el 9 de abril de 2018, de conformidad con las razones expresadas en precedencia.

SEGUNDO: Aceptar la renuncia al poder, presentada por **la abogada Viviana Judith Fonseca Romero**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.020.733.352 expedida en Bogotá y portadora de la tarjeta profesional de abogada número 257.789 del Consejo Superior de la Judicatura, por las razones expuestas a través de memorial visible a folio 127 del plenario.

ii. De la solicitud aclaración sentencia

A través de memorial visible a folios 152 a 154 del expediente, el doctor Rubén Darío Reyes Sánchez, en calidad de apoderado judicial de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, solicita aclaración de la sentencia bajo los siguientes dos puntos:

- Caducidad
- Avalúo y remate de bienes

El artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prevé:

***“Artículo 306. Aspectos no regulados.** En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”*

De conformidad con el artículo antes señalado, existe una remisión de forma expresa a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil (Hoy Código General del Proceso), con la finalidad de llenar los vacíos y regular los aspectos no contemplados por nuestro estatuto procesal de lo contencioso administrativo. En consecuencia, al no vislumbrarse disposición legal en la Ley 1437 de 2011, sobre la **aclaración** de la sentencia, este Despacho se remitirá a estudiar las disposiciones del ordenamiento procesal civil, que contemplan esta figura.

El artículo 285 del Código General del Proceso, establece la posibilidad de adicionar las sentencias que sean proferidas por la autoridad judicial, en los siguientes términos:

***“Artículo 285. Aclaración.** La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutoria de la sentencia o influyan en ella.*

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración”.

Resaltado fuera de texto

De acuerdo a la norma antes descrita, es claro para el Despacho, que el apoderado judicial de la entidad ejecutada, debía solicitar la aclaración de la sentencia dentro del término de ejecutoria de la misma, es decir, dentro de los diez (10) días siguientes, una vez notificado en estrados el fallo proferido.

Quiere decir ello, que el apoderado judicial tenía plazo para solicitar la aclaración de la sentencia hasta el día 23 de abril de 2018; sin embargo, solo hasta el 27 de abril del mismo año³, radicó la solicitud de aclaración de la sentencia, es decir, dejó pasar **14 días hábiles** para elevar tal pedimento.

En este orden de ideas, es claro para el Despacho, que la aclaración de la sentencia solicitada por el apoderado judicial de la entidad ejecutada, no fue presentada dentro del término legal, razón por la cual se **NEGARÁ POR EXTEMPORÁNEO** tal pedimento.

Ahora bien y en gracia de discusión, en el evento que el Profesional del derecho hubiese solicitado la aclaración de la sentencia dentro del término legal, debe señalarse sin hesitación alguna, que dicha petición sería denegada, habida cuenta que el fundamento de la misma se circunscribe en la caducidad de la acción, pues según el abogado de la entidad ejecutada, la ejecutoria de la sentencia se dio el 14 de noviembre de 2008, así mismo el término de 18 meses de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo se culminó el 14 de mayo de 2010, por lo que el actor debió radicar la demanda ejecutiva el 14 de mayo de 2015, y no el 30 de junio del mismo año, dando lugar a la caducidad de la acción, habida consideración que el accionante dejó pasar 1 mes, 2 semanas y 1 día dando lugar a dicho fenómeno.

Al respecto, debe señalar el despacho que no comparte lo señalado por el apoderado judicial de la entidad ejecutada, por cuanto la demanda ejecutiva fue radicada dentro del término legal y ante la Oficina de Apoyo Judicial el 19 de marzo de 2015, tal y como consta a folio 62 del plenario, sin embargo, la misma le correspondió por reparto al Juzgado 23 Administrativo Oral de Bogotá, no siendo ese Despacho el competente para conocer de la presente demanda ejecutiva, tal y como lo dejó plasmado dicho Despacho a través de proveído de data 15 de mayo de 2015⁴, por lo tanto, es claro para este Juzgado, que la solicitud de aclaración presentada por el Apoderado Judicial de la parte demandada no tiene vocación de prosperidad.

³ Folios 152-154

⁴ Folio 64

Corolario de lo anterior, dicho fenómeno fue objeto de estudio en la sentencia proferida el 9 de abril de 2018, a raíz de la excepción previa que de manera errónea elevó la apoderada judicial en su momento, dentro de la contestación de la demanda.

De acuerdo con lo anterior, y al no ser procedente el estudio de la aclaración de la sentencia, en primer lugar por ser haberse solicitado de manera extemporánea, y segundo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 285 del CGP⁵, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR POR EXTEMPORÁNEA la solicitud de aclaración de la sentencia proferida por éste Despacho Judicial el día 9 de abril de 2018, por las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: RECONOCER PERSONERÍA JURÍDICA al Doctor Rubén Darío Reyes Sánchez, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.717.018 de Bucaramanga y portador de la tarjeta profesional de abogado número 262.292 del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad y para los efectos señalados en el poder obrante a folio 135 del expediente en calidad de apoderado de la entidad ejecutada.

TERCERO: Una vez en firme el presente proveído, por secretaría dese traslado a la liquidación de crédito presentada por la entidad ejecutada, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 446 numeral 2° del Código General del Proceso, e ingrese nuevamente al Despacho el expediente, para proferir la decisión que en derecho corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

FV

⁵ “**Artículo 285. Aclaración.** *La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella.*

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de aclaración.”



**JUZGADO VEINTISEÍS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en **ESTADO ELECTRÓNICO** notifico a las partes la
providencia anterior hoy **12 DE MARZO DE 2019**,
a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)

LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA
SECRETARIA